



Barracones escolares, un sistema endémico y lucrativo

De los 3.398 módulos prefabricados que hay en toda España, la mitad se ubica en el País Valenciano. POR ANTONIO TRIVES

Alumnos del colegio público Ciudad de Cremona de Valencia.

BIEL ALIÑO

Pasillos largos y oscuros, zonas de recreo sin calefacción en invierno, aulas con una temperatura excesiva en verano -condiciones difíciles de temperaturas extremas-, aire de mala calidad y bajos niveles de iluminación", lo que implica un ambiente que "afecta negativamente a la concentración de los alumnos y al desarrollo del aprendizaje". Cuando los miembros de la comisión del Banco Europeo de Inversiones (BEI) visitaron en enero de 2014 algunos centros escolares valencianos, comprobaron *in situ* el terrible estado que ofrecían algunas infraestructuras educativas de carácter público. Aulas prefabricadas en las que niñas, niños y adolescentes recibían clases entre charcos de agua, goteras y hume-

dades, cables pelados y hasta ratas muertas, envueltos entre abrigos para combatir el frío. Sólo el País Valenciano cuenta con 1.700 de estos barracones, repartidos en 163 centros a lo largo de su territorio. Módulos cuya finalidad es la de alojar de forma provisional (dos cursos como máximo) al alumnado mientras se amplía o se construye un nuevo centro pero que, en realidad, acaban convirtiéndose en colegios estables. "Es inadmisibles que las aulas no sean provisionales y la solución sea dejarlas de forma permanente toda la escolarización, independientemente de que tengan calidad", denuncia Jesús Salido, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEA-PA). Un diagnóstico que coincide con el de Javier Zurita, secretario de Comunicación de FETE-UGT País Valencià, quien considera que se trata de "un sistema enquistado, endémico". "Esta estrategia es una forma de poner en cuestión lo público", añade Salido.

De los 3.398 módulos educativos prefabricados que sustituyen a aulas de obra repartidos por toda España, justo la mitad se ubican en Castellón, Alicante y Valencia. El volumen de barracones y el tiempo que están instalados (entre 2,5 y 12 años) muestran el nivel de abandono de la educación pública en esta región. A una distancia considerable se sitúa Cataluña, con 996 módulos. La lista prosigue con Andalucía (317 módulos), Castilla-La Mancha (161), Baleares (93), Aragón (39), Murcia (35), Asturias (30), Galicia (12), Castilla y León (11) y La Rioja (4). Cantabria, Extremadura, Navarra y Melilla no tienen ninguno. Por su parte, País Vasco y Canarias no han facilitado los datos.

La situación de las infraestructuras educativas públicas del País Valenciano es el reflejo de las políticas en

materias de educación que durante 20 años ha llevado a cabo el Partido Popular de Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Alberto Fabra. Uno de los ejemplos más ilustrativos lo ilustra el CEIP 103, en Valencia. A 20 minutos a pie de este colegio rugían, en agosto de 2008, los motores de los Fórmula Uno en el circuito urbano de la capital valenciana. Quince días después de aquella competición, los alumnos de educación infantil y primaria del colegio 103 iniciaban el curso en sus nuevas instalaciones: 40 barracones. Han pasado ocho cursos, y los niños y niñas siguen recibiendo sus clases en estas infraestructuras. Los pequeños se enfrentan a problemas de salubridad, carecen de aula polivalente y de informática y sufren la falta de mantenimiento de las instalaciones. La finalización del edificio de obra estaba previsto para 2010, pero nunca se puso el primer ladrillo. Ajenos a todos estos problemas, los monoplazas de Fórmula 1 siguieron compitiendo en las calles de Valencia hasta 2012. Un sueño megalómano que costó casi 300 millones de euros a las arcas públicas valencianas, según denunció Esquerra Unida.

Sin gimnasia cuando llueve

Un aspecto similar al CEIP 103 presenta el centro más antiguo del País Valenciano, que está totalmente conformado por barracones. Desde 2004, los 150 alumnos de la sección del IES La Encantà (San Fulgencio, Alicante) acuden todos los días a sus clases en aulas prefabricadas. En este centro se imparten los cuatro cursos de la ESO por lo que, en estos 12 años, tres generaciones no han pisado un edificio de obra durante su educación secundaria. Los pasillos sólo están protegidos por un pequeño techado de plástico, lo que no impide que cada vez que llueva se formen charcos en el pasillo. "Nos preocupa que haya cables pelados. Con las goteras sufrimos con la idea de que algún alumno pueda electrocutarse, ya que muchas veces el agua llega a las regletas", lamenta su director. Además, los pasillos no disponen de puertas, por lo que no es un recinto cerrado. Esto provoca grandes corrientes de aire al salir del aula. Desde el centro reiteran con ironía que son "afortunados" por vivir en una zona poco lluviosa. Otro de los inconvenientes es la temperatura. "Menos mal que están los aparatos de aire, porque si no sería imposible dar clase, o bien por el frío o por el calor", coinciden varias profesoras. La falta de espacio en las aulas es absoluto y muchos instrumentos y equipamiento del laboratorio ha de guardarse en cajas y apilarse en estanterías. El profesorado tampoco dispone de espacio para guardar sus materiales. Al no haber gimnasio, las clases de educación física están estrechamente ligadas a las condiciones meteorológicas. "Antes de venir al colegio miro qué tiempo va

a hacer y si llueve o hace mucho viento ya sé que tengo que dar clase teórica en un aula", cuenta el profesor.

El actual gobierno valenciano (PSOE-Compromís), ha presentado este año el Mapa de las Infraestructuras Escolares de la Generalitat. El informe desvela que 703 centros educativos de la comunidad (más de la mitad del total) requieren de algún tipo de actuación, lo que significa que 270.000 alumnos y alumnas se ven afectadas por estas deficiencias. De esta cifra, 37.378 estudiantes necesitan un centro nuevo (7.080 estudian en escuelas e institutos constituidos totalmente en barracones y 30.298 lo hace en edificios en malas condiciones). Además hay 139 centros que están parcialmente en barracones, situación que afecta a otros 13.549 alumnos y alumnas.

"Los padres y madres se decantan por llevar a sus hijos a los centros de obra y los que ya no tienen plaza vienen aquí", admite la directora del colegio público Dama de Guardamar (Alicante). Este centro está conformado en su totalidad por barracones, con la ventaja de que los pasillos están debidamente techados y cerrados con puertas al exterior. Al igual que sucede en otros colegios de estas características, en aulas con 27 niños y niñas el espacio es muy reducido, lo que dificulta el normal desarrollo de las clases. Otro de los centros que si-



Un informe de la Generalitat Valenciana desvela que 703 centros educativos en la región presentan deficiencias

En aulas con 27 niños y niñas, el espacio es muy reducido, lo que dificulta el normal desarrollo de las clases

Mejor en barracones que en centros ruinosos

La dejadez durante décadas de la inversión en las infraestructuras públicas valencianas ha dejado un rastro de abandono. En 2013, el 20% de escuelas e institutos públicos en la provincia de Alicante presentaba deficiencias estructurales. Y en muchos casos se rozó la tragedia. Aquel año en Santa Pola, el suelo de un aula del colegio Hispanidad se derrumbó y un grupo de niños cayó por una fosa de metro y medio de profundidad. Una profesora y nueve alumnos resultaron heridos. El miedo también se ha instalado en los padres y madres de los 600 alumnos del colegio Príncipe de España, en la localidad alicantina de Rojales. Durante los últimos diez años se han caído cornisas en repetidas ocasiones. El último desprendimiento fue un trozo de fachada de 25 kilos. Cayó sobre la parte del patio donde minutos antes los chavales estaban sentados durante el almuerzo. En este mismo centro, los profesores no pueden encender la calefacción ni las pizarras digitales, ya que el sistema eléctrico no lo soporta. Además, sus pupitres albergan casi el doble de alumnos de su capacidad inicial y las aulas no disponen de salida de emergencia. Recientemente, el colegio ha sido licitado y se espera que en los próximos meses empiecen las obras. Otro ejemplo es el CEIP Rico Sapena, en Castalla, también en Alicante: 200 alumnos reciben sus clases en barracones desde 2010, después de que el edificio presentara graves problemas estructurales.

**MOLESTANDO A LOS PODERES.
INFORMANDO A LA XENTE.**

SUSCRÍBETE A ATLÁNTICA XXII.
PORQUE OTRO PERIODISMO YA ES POSIBLE.

Educación

<<Con las goteras sufrimos con la idea de que algún alumno pueda electrocutarse>>, alerta un profesor

El gasto en aulas prefabricadas en el País Valenciano superó los 107 millones de euros de 2001 a 2013

➤ nuevo es el CEIP Ciutat de Cremona, en el municipio valenciano de Alaquàs. Constituido totalmente por barracones, han desalojado de clase en cuatro ocasiones a los niños debido a la inundación de las aulas, el desprendimiento del techo por fuertes vientos y por el derrumbe de un muro.

En febrero del año pasado, Esquerra Unida denunciaba que las aulas prefabricadas instaladas en el País Valenciano desde 2001 a 2013 supusieron un gasto de 107.090.522,23 euros. Según los cálculos de la formación, con ese dinero se podría haber acometido la construcción de 14 institutos y 22 escuelas.

20 años de maltrato a la educación pública

Los datos desvelan un interés del Partido Popular por beneficiar a la educación privada. En el año 2000 había 1.424 centros educativos públicos y 521 privados en la Comunidad Valenciana. Catorce años después, en el curso 2014/2015, mientras el número de la pública alcanzaba los 1.692 colegios, la escuela privada se disparaba hasta los 1.022. Este incremento de los centros privados contrasta con los 270.000 alumnos del sistema público que acuden a clases estructuralmente deficientes. "Durante los años del PP, sus dirigentes han trabajado por la dualidad, pública y concertada, en las mismas condiciones, cuando la pública tiene que ser la rama principal y la concertada algo complementario por si alguien quiere acudir a ese tipo de centros", expone Javier Zurita, de Fete-UGT.

En este mismo sentido se posiciona Eva Grimaltos, presidenta de la Confederación de AMPAS Gonzalo Anaya de la Comunidad Valenciana. "El eje vertebrador debería ser la escuela pública porque es la única fórmula capaz de permitir la equidad. Da igual que seas hijo de obrero o de ingeniero. Me parece muy bien el derecho a la privada, pero que los fondos e inversiones de lo público estén bien destinados", argumenta. "Esto es un servicio para el pueblo y lo han mercantilizado", denuncia.

El nuevo gobierno de coalición PSOE-Compromís ha anunciado una nueva hoja de ruta que contempla la construcción de 124 escuelas e institutos en el periodo 2016-2019, presupuestados en 423 millones de euros aproximadamente. El Ejecutivo valenciano también se ha comprometido a eliminar los barracones de 116 centros, con una inversión de 60 millones. Entre estas actuaciones están el CEIP 103, el Ciutat de Cremona, el CEIP Dama de Guardamar y el IES La Encantà de San Fulgencio. Este plan incluye, además, actuaciones de mejora, reforma o rehabilitación en 463 centros. Sindicatos, AMPAS, padres y madres se muestran ilusionados ante este anuncio pero mantienen cautela. Y avisan: "Hasta que no veamos las escuelas y los institutos construidos no nos lo creemos todo al 100%". ■



Las infraestructuras, fuente de corrupción

En verano de 2000 el Gobierno valenciano crea CIEGSA, la empresa pública que se encargará a partir de ese año de llevar a cabo el acondicionamiento, reformas y construcciones de centros educativos públicos. Un informe de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, emitido 16 años después, desvela que esta empresa ha sido un pozo sin fondo de derroche y nido de corruptelas. Durante estos años los sobrecostes en la licitación y construcción de los centros educativos han sido de 540 millones de euros (en muchos casos, el 36% más de lo presupuestado). Sólo con esos sobrecostes, sostiene el informe, se podrían haber construido 108 colegios e institutos. A ello hay que sumarle el gasto de 457 millones que ha supuesto a las arcas valencianas esta empresa pública. En total, casi mil millones de euros con los que se podrían haber levantado 200 centros.

El documento desvela también el interés por instalar barracones. "Nos encontramos bastantes casos en los que las aulas prefabricadas no están vinculadas a un encargo de obra o que, pese a estar vinculadas, las obras no se han iniciado", recoge el informe. En este sentido, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a las empresas ALGECO, REMSA, BALAT, ABC y DRAGADOS por la creación de un cártel donde acordaban y fijaban los precios en los concursos de adjudicación de aulas prefabricadas entre 2008 y 2009. La propia CNMC apunta en su investigación que una de las empresas del cártel, REMSA, se manifestaba respecto a este tema en un correo

interno emitido el 23 de febrero de 2009:

<<Respecto a la reunión del próximo miércoles te explico nuestra posición con respecto al acuerdo sobre CIEGSA. La bajada inicial será del 0%. Sobre los 40 puntos de mejoras voluntarias deberíamos pactar 30 puntos a elegir según convenga a cada uno. En el reparto de módulos queremos se nos garantice un mínimo de 170 módulos. Nuestras preferencias son sobre colegios medianos de 40 a 60 módulos (mínimo 3 colegios de este tipo) y algunos pequeños>>

Derroche de fondos europeos

No sólo se ha jugado con el dinero de la sociedad valenciana, también con fondos europeos. En 2004, la Generalitat lanzó el programa *Crea Escola* con la finalidad de acometer las necesidades de infraestructuras educativas de mejora, adecuación y construcción de escuelas e institutos. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el gobierno valenciano acordaron un proyecto que finalizaría el 31 de diciembre de 2013. Este acuerdo se basaba en la actuación sobre 409 centros con 1.600 millones de euros de presupuesto, financiados por ambas instituciones al 50%. Al finalizar el plazo del proyecto, el BEI había abonado su parte, 800 millones, mientras que la Generalitat apenas había desembolsado 200. Quedaron sin ejecutarse 113 centros.

En octubre de 2014 se presentó un nuevo plan en el que la Generalitat invertiría 187 millones de euros en 32 centros para ser construidos y acondicionados y acabar con los barracones. Muchas de las escuelas incorporadas en *Crea Escola* no fueron incluidas en esta nueva actuación.